



NICARAGUA ELECCIONES 2021: UN PLAN DOLOSO PARA ACABAR CON LA DEMOCRACIA

NICARAGUA
2021 ELECTIONS:
A MALICIOUS PLOT TO END DEMOCRACY

RESUMEN EJECTIVO / EXECUTIVE SUMMARY



RESUMEN EJECUTIVO

1. A pocos días de las elecciones generales en Nicaragua, este informe recoge los principales resultados de la observación y monitoreo de las diferentes fases del proceso electoral entre octubre de 2020 y septiembre de 2021.
2. El resultado de este seguimiento permite concluir que los fundamentos legitimadores de un proceso electoral integro han sido conculcados de manera sistemática mediante la manipulación excluyente del padrón, la persecución judicial de opositores y la exclusión de candidaturas, el uso ilegal de recursos del Estado con fines proselitistas y, en general, la falta de garantía de los derechos y libertades por parte del poder ejecutivo y la autoridad electoral.

La integridad del proceso está comprometida y, en consecuencia, las elecciones del 7 de noviembre de 2021 carecen de legitimidad.

ELECCIONES INCLUSIVAS Y LIMPIAS

3. La autoridad electoral actúa fuera de los estándares democráticos de imparcialidad y transparencia. Las y los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) electos por la Asamblea Nacional en mayo de 2021 (7 propietarios y 3 suplentes) o son militantes del FSLN o bien son señalados como colaboracionistas con el partido de gobierno. Además, los organismos de administración electoral intermedia se encuentran bajo el dominio del FSLN y sus partidos colaboracionistas inscritos en la contienda. Se trata de los Consejos Electorales Departamentales, Regionales y Municipales (CED, CER y CEM, respectivamente). Estos organismos tienen como atribución ejercer en sus áreas de responsabilidad las funciones electorales de administración, organización y regulación del proceso electoral en los departamentos, regiones autónomas y municipios.
4. El padrón electoral ha sido manejado de forma discriminatoria por el CSE negándose a la ciudadanía y a la sociedad civil el acceso al mismo para fines de verificación. La ley establece su publicación en las afueras de los Centros de Votación (CV) hasta 90 días antes de la elección y esto no ha sucedido.
5. Se han suprimido más de 1.100 mil centros de votación (CV) de un total de 4.300 que había en 2017, equivalente al 25% o uno de cada cuatro CV. La mayor reducción de CV ocurrió en los departamentos de Jinotega, Matagalpa y Managua, tres de las principales plazas electorales del país, que concentraban en 2017 a un tercio de todos los electores del país (36%) distribuidos en 1.312 Centros que aglutinaban más de 5.111 Juntas Receptoras de Votos (JRV).
6. Con referencia al padrón de la última elección en 2017, una estimación técnica sugiere que un millón de electores han sido eliminados del padrón, equivalente a casi un 20% del total del electorado. Por un lado, de los 5.095.747 de personas empadronadas entonces, el padrón de 2021 contiene solo 4.478.334. Por otro, esta nueva cifra tampoco refleja el incremento natural de la población en edad de votar (16 años), que es de al menos 100.000 nuevos electores por año, lo que debería producir un padrón de unos 5.5 millones de personas habilitadas para votar. El CSE no ha informado las razones por las cuales se da la variación en el total de electores ni tampoco por qué no se observa el incremento natural del padrón.

ELECCIONES COMPETITIVAS

7. Han sido cancelados 3 partidos políticos opositores y detenidas arbitrariamente 7 personas candidatas a la presidencia; lo que constituye una inhabilitación de facto, que utiliza métodos ilegales y engañosos para eliminar toda competencia electoral. Asimismo, se dictó también inhabilitación de una candidata a la vicepresidencia. Las personas detenidas son: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Miguel Mora, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena y Noel Vidaurre. Los partidos cuya personería fue cancelada son: Partido Restauración Democrática (PRD), Partido Conservador (PC) y Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).
8. Se ha evidenciado una coacción sistemática para condicionar las preferencias del votante por parte de la autoridad pública. Por un lado, las trabajadoras y trabajadores del Estado y sus familiares, así como los beneficiarios de programas sociales, son obligados a participar en las diferentes actividades del calendario electoral y de propaganda del régimen. Adicionalmente han sido encarceladas siete personas candidatas a la Presidencia, lo que también limita la posibilidad de que se respete la integridad de las preferencias de quienes habían optado por emitir el voto a favor de las personas arrestadas
9. Desde inicios de 2007, cuando Daniel Ortega asumió la Presidencia de la República por segunda ocasión, fueron evidenciándose numerosas situaciones en las que se hacía uso de los bienes, recursos y personal del Estado para actividades particulares del partido de gobierno, así como eventos de campaña dentro y fuera de períodos electorales.
10. Las condiciones de la campaña política son totalmente desiguales debido a que el FSLN se encuentra en permanente propaganda desde las instituciones del Estado, estructuras barriales, sus medios de comunicación y redes sociales, sumado a un reiterado abuso en el uso de recursos públicos. Asimismo, en el marco de las actividades del partido-gobierno, se han realizado entregas de vivienda, jornadas de vacunación, entrega de títulos de propiedad, inauguración de proyectos de infraestructura, entre otros programas gubernamentales que son regularmente utilizados con fines partidarios y electorales.
11. Hasta el 15 de septiembre, se registró uso de recursos del Estado para fines partidarios y electorales del oficialista FSLN, que incluye la partidización de programas gubernamentales y conmemoraciones partidarias del FSLN. Estos reportes fueron recibidos desde los 17 departamentos y Regiones Autónomas y de 132 de los 153 municipios (86,27%) del país, con la participación de al menos 23 entidades públicas.
12. En lo relativo al financiamiento electoral, no se tiene acceso a formas de monitorear el financiamiento de los partidos políticos, convirtiéndose este factor en otra fuente opaca de financiación para el oficialista FSLN y de prebendas para los partidos colaboracionistas que participan en las elecciones. El hecho refleja un fenómeno más amplio como es que el partido de gobierno opera a través de redes de corrupción que atraviesan lo social, lo familiar, lo partidario, lo estatal y empresarial, sumado a la falta de acceso a información pública y a los mecanismos que garanticen procesos de rendición de cuentas.
13. Debido a la Covid-19 y para el período de campaña electoral, se prohibió a los partidos políticos realizar caravanas vehiculares, caminatas, concentraciones y aglomeraciones políticas; también se limitó las concentraciones políticas presenciales a no más de 200 personas y un reducido tiempo de duración de entre 30 minutos y una hora; además se estableció que los encuentros deben realizarse en áreas abiertas y se impuso a los partidos priorizar “los mecanismos de difusión virtuales y digitales”. Sin embargo, durante el fin de semana de inicio de campaña, el Gobierno convocó a más de 4.300 actividades, en este tipo de encuentros culturales, de entretenimiento y deportivos, no hubo restricción de personas o de tiempo, ni de ningún otro tipo.

LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO ELECTORAL

14. Desde mucho antes de iniciado el período electoral hubo una continuidad en la persecución de personas opositoras al Gobierno, entre las que destacan aspirantes a candidaturas, periodistas, líderes sociales y personas naturales, en general opositoras. No obstante, debe resaltarse que dicha persecución vino desarrollándose de manera sistemática desde el estallido social de abril de 2018, prolongándose e intensificándose en el tiempo, mediante el uso la maquinaria represiva del régimen y del financiamiento de la Policía Nacional.
15. Los perfiles de personas víctimas de la represión según reportes ciudadanos procesados por Urnas Abiertas, incluyen personas integrantes de organizaciones políticas y sociales (especialmente aspirantes a cargos públicos), periodistas y personal de medios de comunicación, defensores y defensoras de DDHH, personal de salud y activistas. Las restricciones impuestas por el gobierno se dieron de distintas maneras: intimidación, amenazas, agresiones, campañas de desprestigio, persecución judicial, detenciones arbitrarias, entre otras.
16. A partir del 25 de mayo de 2021, mujeres y hombres que trabajan como periodistas, editores, fotógrafos, corresponsales internacionales, personal administrativo o propietarios de medios, trabajadores independientes, entre otros, han sido citados por el Ministerio Público, con la justificación de la investigación por lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES). Testimonios de periodistas y defensores de derechos humanos que dan seguimiento a las investigaciones aseguran que los fiscales realizan las entrevistas de forma hostil y utilizando la manipulación como estrategia de intimidación.
17. La persecución judicial como estrategia represiva contra personas candidatas, organizaciones políticas, integrantes de partidos y movimientos y la sociedad en general mantiene hasta la fecha 155 personas detenidas, 37 de ellas en el marco del contexto electoral y 7 de precandidaturas a la presidencia.
18. Con base en el Observatorio de Violencia Política de Urnas Abiertas, entre el 1 de octubre de 2020 y el 15 de septiembre de 2021, se han registrado 1.513 hechos de violencia política en el marco del proceso electoral. Los datos específicos y más información detallada pueden consultarse en el sitio web de Urnas Abiertas (www.urnasabiertas.com). Estos hechos de violencia política han tenido como principal objetivo eliminar la competencia electoral y se han evidenciado a través de manifestaciones de violencia tales como intimidación, hostigamiento, lesiones, detención arbitraria, desaparición forzada, malos tratos, entre otras.
19. De los 1.513 hechos de violencia política registrados hasta el 15 de septiembre:
 - 5 de cada 10 hechos han sido de hostigamiento.
 - 200 hechos están relacionados con procesos judiciales irregulares (13,22%).
 - 6 de cada 10 hechos han sido contra personas integrantes de organizaciones o partidos políticos.
 - 168 hechos se han desarrollado contra periodistas y sus medios de comunicación (11,10%).
 - 497 hechos se han dado contra la Unidad Nacional Azul y Blanco y sus integrantes (32,85%)
 - 2 de cada 10 hechos han sido cometidos contra personas precandidatas a la presidencia o diputación.
 - 7 de cada 10 hechos fueron cometidos por la Policía Nacional.

20. En materia de libertad de asociación y reunión, entre noviembre de 2020 y enero de 2021, el partido de gobierno instaló las Unidades de Victorias Electorales (UVE) en los niveles departamental, municipal, institucional, universitario, barrial y comunitario. Estas entidades han sido financiadas públicamente y para el desarrollo de sus actividades se ha hecho uso de otros recursos del Estado, muchos provenientes de la cooperación internacional. En contraste, diversas organizaciones de oposición que intentaron organizarse para participar del proceso electoral en octubre de 2020, vieron sus actividades y reuniones atropelladas por graves manifestaciones de violencia política, entre ellas, asedio, agresiones físicas y detenciones.
21. En el marco temporal comprendido a partir de la aprobación de las reformas electorales de mayo de 2021 hasta la fecha, la restricción a la libertad de asociación se manifestó principalmente a través de cancelaciones arbitrarias e ilegales de la personería jurídica de 3 partidos políticos opositores y de más de 40 organizaciones sociales nacionales e internacionales, sumando un total de 55 organizaciones canceladas desde el año 2018.
22. La libertad de movilización, al igual que los demás derechos humanos, ha venido siendo erosionada desde 2018 y, en el marco del proceso electoral, se ha observado una continuidad en las restricciones para que las y los nicaragüenses puedan movilizarse libremente, con la variante de que el principal objetivo ha sido limitar la participación política a través de la prohibición de actividades o manifestaciones políticas y sociales organizadas. El proceso electoral ha estado dominado por un clima de discriminación e intimidación contra toda aquella persona que se oponga o se exprese en contra del Gobierno.
23. Como evidencian los datos del monitoreo de Urnas Abiertas, el Gobierno ha cometido violaciones sistemáticas de Derechos Humanos, especialmente, contra los derechos de opinión, expresión, reunión pacífica, asociación y movilización, irrespetando los principios de no discriminación y no intimidación.
24. El desarrollo ilegal y fraudulento del proceso en su conjunto impide toda posibilidad de que los comicios del 7 de noviembre próximo puedan conducir a un resultado que refleje la libre expresión de la voluntad popular como exigen los estándares democráticos y los convenios y declaraciones internacionales de derechos y libertades suscritos por el Estado nicaragüense. En consecuencia, estas elecciones deben considerarse viciadas de origen y, por tanto, ilegítimas.
25. Este equipo de trabajo considera fundamental para el desarrollo de una transición democrática el cese de la represión, la liberación absoluta de los presos políticos y la garantía de justicia y reparación para las víctimas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Asimismo, se recomienda implementar reformas profundas al marco normativo electoral y al Poder Electoral y se exige al régimen de Ortega el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. De no producirse un giro hacia la plena garantía de los derechos humanos y la integridad electoral a través de la reprogramación de nuevas elecciones, se hace un llamado a la comunidad internacional a desconocer el resultado de las presentes elecciones.

RECOMENDACIONES

Con base en los hallazgos producto del monitoreo y la observación de la situación social y política entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, y de la extraordinaria y precaria situación del proceso electoral que permite aseverar que es público y notorio que la integridad del proceso electoral ha sido vulnerada significativamente, evidenciándose prácticas y acciones que atentan contra su legitimidad y la credibilidad de sus resultados, así como contra el estado de derecho, el debido proceso, y los Derechos Humanos de los ciudadanos nicaragüenses, este equipo de trabajo plantea las siguientes recomendaciones para atención inmediata en pro de la democracia, los derechos humanos, la paz social y el bienestar de todos y todas las nicaragüenses:

- 1 Exhortar al gobierno nicaragüense, desde las instancias nacionales e internacionales, para la **suspensión y reprogramación de las elecciones**, para que las mismas sean convocadas y organizadas conforme a derecho y a los principios internacionalmente aceptados, y con la presencia de misiones nacionales e internacionales de observación electoral calificadas.
- 2 **Cese inmediato de la represión, libertad plena para los presos políticos y garantías procesales** para que se garantice la justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. **Cese de la persecución contra periodistas y medios de comunicación y acceso** a la información pública y de participación ciudadana, de acuerdo a lo estipulado en la ley.
- 3 **Implementación efectiva de las reformas** necesarias en el marco normativo electoral, incluidas las facultades y la naturaleza del Poder Electoral.
- 4 Es fundamental que los gobiernos democráticos, los organismos internacionales y demás actores internacionales pertinentes hagan uso de sus buenos oficios para evidenciar la falta de legitimidad de origen de los poderes Ejecutivo y Legislativo nicaragüenses que serán electos en el proceso del próximo 7 de noviembre, dadas las graves violaciones a la integridad de este así como la persecución e inhabilitación de facto sobre los candidatos opositores, y favorezcan los mecanismos de cooperación internacional necesarios para el **restablecimiento del orden constitucional**.
- 5 De no producirse un giro hacia la plena garantía de los derechos humanos y la integridad electoral a través de la reprogramación de nuevas elecciones, se hace un llamado a la comunidad internacional a desconocer el **resultado de las elecciones**.

EXECUTIVE SUMMARY

1. With few days left before the general elections in Nicaragua, this report combines the main results of the observation with a monitoring of the various phases of the electoral process between October 2020 and September 2021.
2. The end results of this follow-up leads us to conclude that the legitimizing foundations of a comprehensive electoral process have been systematically violated through the exclusionary manipulation of the register, the legal persecution of opponents and the exclusion of candidates, the illegal use of State resources for proselytizing purposes and, overall, the absence of guarantees of rights and freedoms by the executive branch and the electoral authority.

The integrity of the process is compromised and, consequently, the November 7, 2021 elections are devoid of legitimacy.

CLEAN INCLUSIVE ELECTIONS

3. The electoral authority operates outside the democratic standards of impartiality and transparency. The magistrates of the Supreme Electoral Council (CSE) elected by the National Assembly in May 2021 (seven titular magistrates and three alternates) are either FSLN militants or have been designated as governing party collaborationists. Moreover, mid-level electoral administration bodies are under the domination of the FSLN and its collaborationist parties running in the electoral campaign. These are the Departmental, Regional and Municipal Electoral Councils (CED, CER, and CEM, respectively). These bodies wield the authority (within their respective areas of responsibility) to carry out the administration, organization, and regulation of the electoral process in the departments, autonomous regions, and municipalities.
4. The CSE has handled the electoral roll in a discriminatory manner, denying citizens and civil society access for verification purposes. Law provides for publication of the electoral roll just outside polling stations for a maximum of 90 days before the election, and this has not occurred.
5. Of the 4,300 total polling stations in 2017, over 1,100 of them were eliminated, equivalent to 25% or one out of four polling stations altogether. The largest cutback in polling stations occurred in the departments of Jinotega, Matagalpa, and Managua, three of the main electoral areas in the country, comprising in 2017 one third (36%) of all voters in the country, totaling over 5,111 polling boards (Juntas Receptoras de Votos, or JRVs), spread out among 1,312 Centers.
6. Taking the register from the last election (2017) into account, a professional estimate suggests that one million voters were purged from the electoral register, roughly 20% of the total electorate. To begin with, the 2021 register includes only 4,478,334 of the 5,095,747 individuals registered at the time. This new figure, however, also doesn't reflect the natural increase in voting age population (16 and older), which accounts for at least 100,000 new voters per year, should yield a register with roughly 5.5 million people eligible to vote. The CSE has not accounted for the variation in the total number of voters nor why there was no natural increase in registered voters.

COMPETITIVE ELECTIONS

7. Three opposition political parties were abolished, and seven presidential candidates arbitrarily arrested, which constitutes de facto disqualification, using illegal, deceptive methods to eliminate all electoral competition. Likewise, a disqualification of a vice presidential candidate was also issued. The individuals arrested were Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Miguel Mora, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, and Noel Vidaurre. The parties whose legal status was revoked were the Democratic Restoration Party (PRD), the Conservative Party (PC), and the Citizens for Freedom Party (CxL).
8. Law enforcement has been exerting systematic coercion to condition the preferences of voters. On the one hand, the regime compels state workers and their families, as well as beneficiaries of social programs, to participate in its multiple propaganda activities and electoral timetable. Moreover, it has jailed seven presidential candidates, further curtailing the likelihood of respect for the integrity of preferences of the voters who back the arrested individuals.
9. Since the outset of 2007, when Daniel Ortega assumed the Presidency of the Nicaragua for a second time, numerous situations ostensibly come about whereby State assets, resources and personnel were used for the governing party's private activities, as well as for campaign events before, during, and following electoral campaign season.
10. Political campaign conditions are entirely unequal because the FSLN is in permanent propaganda mode, from State institutions to neighborhood organizations, its media outlets and social networks, in addition to chronic mishandling of public resources. Likewise, within the party-government activities framework, there have been housing grants, vaccination events, the awarding of property deeds, the inauguration of infrastructure projects, among other government programs systematically used for partisan and electoral purposes.
11. The use of State resources for partisan and electoral purposes of the ruling FSLN was even observed on September 15, including partisanship of government programs and partisan FSLN commemorations. These activities were reported from all seventeen Departments and Autonomous Regions and from 132 of the nation's 153 municipalities (86.27% of the country), with the participation of at least 23 public institutions.
12. As for the ruling FSLN's electoral funding, access to the means to monitor political party financing has been denied, making this another opaque source of financing and of perks for collaborating parties participating in the elections. This reflects the broader phenomenon of the governing party operating through networks of corruption that transcend social, family, partisan, state, and business constructs, together with the absence of access to public information and the mechanisms that can ensure accountability.
13. Due to Covid-19, and throughout the electoral campaign season, political parties were prohibited from driving in vehicular caravans, engaging in organized walks, rallies, and crowds involved in political activities; face-to-face political gatherings were also limited to no more than 200 people at a time and a shorter duration of 30-60 minutes; additionally, meetings had to be held in open areas and political parties were compelled to prioritize "virtual and digital dissemination mechanisms." Notwithstanding, during the initial campaign weekend, the Government organized over 4,300 activities of this type of cultural, entertainment, and sporting events, without any limits as to the number of people assembled, duration, or any other type of restriction.

HUMAN RIGHTS IN THE ELECTORAL CONTEXT

14. People opposed to the Government were constantly being persecuted long before the campaign season began, standing out among the aspiring candidates, journalists, social leaders, and opponents, in general. It should be noted, however, that this persecution had been developing steadily since the social unrest of April 2018, expanding, and gathering strength over time, through the regime's repressive machinery and its funding of the National Police.
15. According to citizen reports processed by the NGO Urnas Abiertas (Open Ballot Boxes), the profiles of repression victims include members of political and social organizations (especially candidates for public office), journalists and media personnel, human rights defenders, health personnel, and activists. The Government imposed restrictions by multiple means: intimidation, threats, attacks, smear campaigns, legal persecution, arbitrary arrests, among others.
16. As of May 25, 2021, the Public Prosecutor's Office, using the excuse of money laundering investigations of the Violeta Barrios de Chamorro Foundation and the Nicaraguan Foundation for Economic and Social Development (FUNIDES), began to subpoena individuals working as journalists, editors, photographers, international correspondents, administrative personnel or media outlet owners, independent workers, among others. Testimonies from journalists and human rights defenders following up on these investigations affirm that prosecutors were conducting interviews in a hostile manner and engaging in manipulation as an intimidation strategy.
17. To date, the repressive strategy of judicial persecution against candidates, political organizations, members of parties and movements, and society in general has kept 155 people jailed, 37 of them in the context of elections, and seven individuals running to become candidates (precandidatos).
18. According to the Observatorio Ciudadano de Violencia Política de Urnas Abiertas (Citizens' Observatory of Political Violence), between October 1, 2020 and September 15, 2021, 1,513 acts of political violence were reported in the context of the electoral process. Specific information in greater detail may be found on the Urnas Abiertas website (www.urnasabiertas.com). The main objective of these acts of political violence is elimination of electoral competition and they have been observed in manifestations of violence such as intimidation, harassment, infliction of injuries, arbitrary arrest, forced disappearance, ill-treatment, among others.
19. Of the 1,513 acts of political violence registered by September 15, 2021:
 - five out of ten of these acts are attributable to harassment.
 - 200 of these acts (13.22%) stem from irregular judicial processes.
 - Six out of ten of these acts were perpetrated against members of political organizations or parties.
 - 168 events (11.10%) were committed against journalists and media outlets.
 - 497 of these acts (32.85%) were committed against the Unidad Nacional Azul y Blanco (Blue and White National Unity) and its members.
 - Two out of ten of these acts were committed against individuals who are candidates in the presidential and congressional primary races.
 - Seven out of ten of these acts were committed by members of the National Police force.

20. In terms of freedom of association and assembly, between November 2020 and January 2021, the government party installed the Electoral Victory Units (UVE) at the departmental, municipal, institutional, university, neighborhood, and community levels. These Units have been publicly funded and other State resources (many from international cooperation) have been dedicated to carrying out their respective activities. In contrast, multiple opposition organizations attempting to organize for participation in the October 2020 elections saw their activities and meetings overwhelmed by serious manifestations of political violence, including siege, physical attacks, and arrests.
21. Within the time frame from the approval of the electoral reforms from May 2021 to date, restrictions on freedom of association were manifested mainly through the arbitrary, unlawful abolishment of the legal status of three opposition political parties and of over 40 national and international social organizations, making a total of 55 organizations abolished in this way since 2018.
22. Freedom of movement, like other human rights, has been eroding since 2018 and, within the framework of elections there has been an observable continuity in restrictions on the free movement of Nicaraguans, with the distinction of the main objective being the limiting of political participation by banning organized political and social activities or demonstrations. Elections have been dominated by a climate of discrimination and intimidation against anyone who opposes or speaks out against the Government.
23. As demonstrated by data from Urnas Abiertas monitoring, the Government has committed systematic human rights violations, particularly against the rights of opinion, expression, peaceful assembly, association and movement, disrespecting the principles of non-discrimination and non-intimidation.
24. The overall illegal, fraudulent progress of the process precludes any possibility for the November 7 elections to culminate in results reflecting the free expression of the popular will as required by democratic standards, international conventions, and declarations of rights and freedoms as undersigned by the Nicaraguan State. Consequently, these elections must be considered flawed from the outset and are therefore illegitimate.
25. This work team considers the cessation of repression, the absolute release of political prisoners and the guarantee of justice and reparation for the victims of human rights and crimes against humanity as essential for a democratic transition to develop. Likewise, we recommend the implementation of profound reforms to the electoral regulatory framework and to the Electoral Branch, and we also demand that the Ortega regime respect human rights and fundamental freedoms. In the absence of a shift towards the full guarantee of human rights and electoral integrity through the rescheduling of a new election, we hereby call for the international community to ignore the results of this election.

RECOMMENDATIONS

Based on the findings arrived at from monitoring and observing the social and political situation in Nicaragua from October 2020 to September 2021, and due to the extraordinary, precarious electoral process allowing us to proclaim its **lacking legitimacy and integrity altogether**, this work team makes the following recommendations for immediate attention in support of democracy, human rights, social harmony, and the well-being of all Nicaraguans:

- 1 National and international authorities should urge the Nicaraguan government to **suspend and reschedule the upcoming elections** so that they are convened and organized in accordance with the law and internationally accepted principles, and with the bodily present participation of qualified national and international electoral observation missions.
- 2 **Immediate cessation of repression, full freedom for political prisoners, and procedural guarantees to ensure justice and reparations** for victims of human rights violations and crimes against humanity. **Cessation of persecution against journalists and the media**, and access to public information and citizen participation, in accordance with the provisions of the law.
- 3 **Effective implementation of necessary reforms to the electoral regulatory framework**, including the powers and the nature of the Electoral Power.
- 4 It is essential for democratic governments, international organizations, and other relevant international actors to use their good offices to point out the lack of legitimacy of the origins of the Nicaraguan Executive and Legislative Branch to be elected on November 7, given the serious violations to its integrity, the persecution and the de facto disqualification of opposition candidates, and to lend support to international cooperation mechanisms necessary to **reestablish the constitutional order**.
- 5 In the absence of a shift towards the full guarantee of human rights and electoral integrity due to the rescheduling of new elections, we are calling for the international community to **ignore the outcome of these elections**.